

MOCION AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

D. JOSÉ MANUEL ALONSO PLAZA, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular para su aprobación la siguiente **MOCIÓN** en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN

La desigualdad socava la sociedad española. La crisis y las políticas económicas dominantes erosionan la cohesión social, disparan la pobreza y estiran la brecha entre ricos y pobres. El número de españoles atendidos en Cáritas ha pasado de 370.000 a 1,3 millones y España ocupa el segundo lugar del continente en que más ha aumentado la desigualdad. Europa encara una época de desigualdad creciente en la que la alternancia política es meramente decorativa.

En nuestro país, la mayor y más dañina muestra de empecinamiento son las políticas del Partido Popular y su capacidad de inferir sufrimiento. La pobreza no sólo no remite sino que se está cronificando. En medio de este proceso, las declaraciones de diversos miembros del Ejecutivo no sólo no conducen a transmitir mensaje alguno de esperanza en la mejora social, sino que contribuyen a atizarla. Valga como ejemplo el cinismo del ministro Montoro al negar el informe de Caritas que sitúa a España como el segundo país con mayor pobreza infantil de Europa. "No se ajusta a la realidad" dijo el ministro, porque su contenido, es "puramente estadístico". La negación de la realidad se ha elevado a estrategia política. Es de destacar aquí la contestación de sor Lucía Caram, que exigió su dimisión.

"La pobreza no sólo crece sino que se está cronificando", explicó la religiosa, quien echó la culpa a un "capitalismo sin entrañas". "Los españoles estamos muy cabreados por esta mentira organizada. Y lo peor de todo es que Cáritas seguirá trabajando para parar el golpe y el Gobierno seguirá recortando prestaciones sociales", añadió, en un discurso cuyo realismo a la hora de interpretar la realidad social merece una reflexión detenida. En este país no ha habido un estallido social gracias al soporte familiar y a la implicación de toda la sociedad,

Razones más que suficientes para pedir, por mera dignidad, la dimisión inmediata del ministro de Hacienda y administraciones públicas.

La respuesta del gobierno del Partido Popular ha sido una ofensiva contra los derechos civiles y la contestación política de la ciudadanía. El anteproyecto de ley de seguridad, la reforma del código penal, y las desmedidas actuaciones policiales, unidas a las dudosas estrategias puestas en marcha durante las

últimas movilizaciones, son un intento del Gobierno por criminalizar a los movimientos sociales, una vez que ha comprobado que la ciudadanía no se resigna y sigue protestando y proponiendo. El objetivo del Gobierno que preside Mariano Rajoy parece ser llevar al país hacia un régimen cada vez más autoritario, sin temor a rebasar esta calificación más allá del más elemental respeto a los derechos de la ciudadanía. El Ejecutivo central quiere poner una mordaza a los ciudadanos y evitar que la gente se movilice y proteste por el temor a ser sancionados: Lo que quieren es un pueblo resignado y silenciado, evitar que la gente se movilice y proteste por el temor a ser sancionados, detenidos y coaccionados.

El pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un "uso excesivo de la fuerza" contra las manifestaciones ciudadanas. Amnistía Internacional ha entregado en el Ministerio de Interior entregar más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno que investigue los abusos cometidos por las cargas policiales. En el comunicado, AI también denunciaba que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó pretendía prohibir la difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de sus funciones en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana

Tal es el empeño del Gobierno que, mientras todas las partidas presupuestarias han ido descendiendo, la destinada a Interior no ha parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de Fernández Díaz en materia de seguridad ciudadana será en el presente ejercicio de 5.264 Euros, 72 más que en el ejercicio anterior, lo cual supone un incremento del 1,4 por ciento, mientras programas como el de lucha contra la droga, ha vuelto a sufrir notorios recortes.

En Zaragoza, han sido varias las mociones presentadas contra la actuación del Delegado del Gobierno. El "exceso de celo" del señor Gustavo Alcalde le ha llevado a ser responsable de actuaciones como la reciente redada llevada a cabo en el Rastro, con un despliegue policial que contribuye más a inquietar a las personas y dificultar sus actividades, que a transmitir confianza a la población.

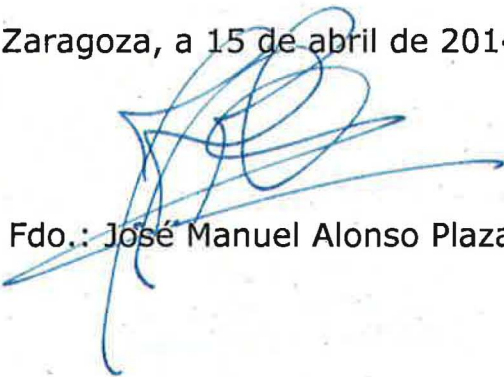
Por lo que se propone que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza adopte los siguientes

ACUERDOS

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza declara su afección y respeto a los derechos constitucionales de reunión y manifestación, y condena la represión que sufren los ciudadanos y ciudadanas que ejercen estos derechos.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el proceso de criminalización de los protestas ciudadanas que ha emprendido el Gobierno de Mariano Rajoy.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza considera las desigualdades sociales y la respuesta a las mismas como responsables de la movilización ciudadana, comprometiéndose a luchar contra la desigualdad social a través de las políticas sociales, y del conjunto de sus políticas
4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su rechazo absoluto al contenido del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana por entender que supone un atentado a los derechos fundamentales y que busca criminalizar la protesta para evitar una contestación social e insta al Gobierno de España a su retirada.

Zaragoza, a 15 de abril de 2014



Fdo.: José Manuel Alonso Plaza

